

France 24 **María Clara Calle Aguirre** <https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20201206-colombia-disidencias-farc-amenazan-lideres-indigenas-cauca>

Colombia: grupos armados asesinan a cuatro indígenas y declaran "objetivo militar" a los líderes compartidos

Primera modificación: 06/12/2020 - 19:21



El senador indígena Feliciano Valencia asiste al homenaje tras un año del asesinato de la gobernadora indígena Cristina Bautista y cuatro guardias. Fotografía de archivo del 29 de octubre de 2019, tomada en la vereda la Luz de Tacueyó, departamento del Cauca, Colombia.

El senador indígena Feliciano Valencia asiste al homenaje tras un año del asesinato de la gobernadora indígena Cristina Bautista y cuatro guardias. Fotografía de archivo del 29 de octubre de 2019, tomada en la vereda la Luz de Tacueyó, departamento del Cauca, Colombia. © Ernesto Guzmán Jr. / EFE

Texto por: María Clara Calle Aguirre

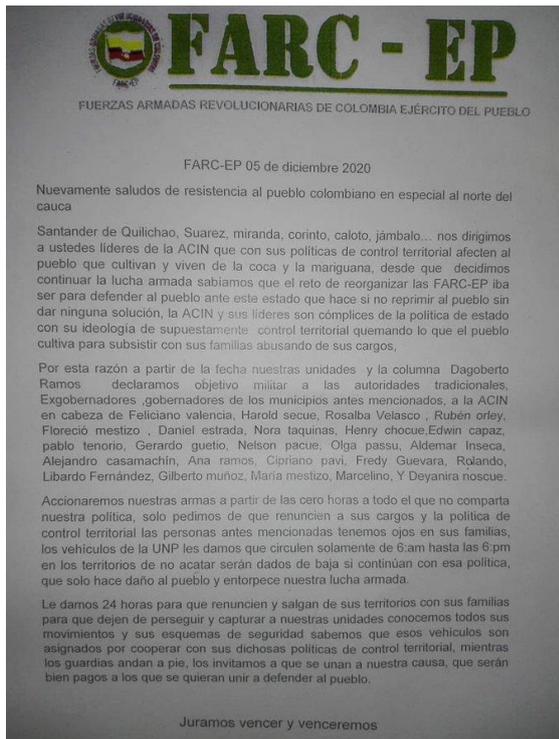
Horas después de una masacre perpetrada por hombres armados en el departamento del Cauca, las disidencias de las Farc amenazaron de muerte al senador del pueblo nasa Feliciano Valencia y a los líderes ancestrales de seis municipios por defender la sustitución de la coca por cultivos lícitos. Esto ocurre la misma semana en la que un grupo armado decapitó a un exgobernador de la etnia embera en Chocó, lo que generó el desplazamiento de casi un millar de indígenas.

Los balazos contra su vehículo blindado el 29 de octubre fueron apenas la primera de las más recientes amenazas que ha tenido que enfrentar el senador indígena Feliciano Valencia.

Dos semanas después, fue una explosión a escasos metros de su vivienda, en el municipio de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca. Valencia relacionó este hecho con la audiencia en la que participó el día anterior y en la que denunció que decenas de menores de edad habían sido reclutados por grupos armados ilegales.

Ahora, sobre el líder indígena nasa pesa una condena de muerte. Un panfleto firmado por las disidencias de las Farc lo declara "objetivo militar" a él y a las autoridades ancestrales de seis municipios. La razón: defender el territorio.

Valencia ha promovido públicamente que en el Cauca se sustituyan los cultivos de coca que no se usan para las tradiciones indígenas, sino para nutrir las cadenas del narcotráfico. Esto es un claro apoyo del acuerdo de paz que firmaron hace cuatro años el Gobierno colombiano y la entonces guerrilla de las Farc, y que tiene como uno de sus puntos la sustitución de cultivos de uso ilícito.



Lo que para Valencia representa la vía para que las comunidades se integren a la economía formal, para las disidencias que se apartaron del pacto de paz es una amenaza a sus negocios ilegales. "Les damos 24 horas para que renuncien (a sus cargos) y salgan de sus territorios con sus familias, para que dejen de perseguir y capturar a nuestras unidades", reza el panfleto.

El documento agrega que las "políticas de control territorial" de los líderes indígenas como Feliciano Valencia "afectan al pueblo que cultivan y viven de la coca y la mariguana (sic)". El grupo que firma la amenaza tilda a los defensores como "cómplices de la política de Estado" al defender lo planteado en el acuerdo de paz.

Las amenazas no son solo contra este líder y van mucho más allá de un panfleto. En la última semana, ha acontecido una escalada de la violencia contra los indígenas del Cauca. El día 1 de diciembre mataron al comunero Romelio Ramos, y cuatro personas más fueron masacradas por un grupo ilegal en el municipio de Santander de Quilichao en la noche del sábado 5 de diciembre. Tres de los muertos eran indígenas, incluido Eduardo Julicué, hijo de la lideresa Luz Eyda Julicué.



Tan solo horas después de esta última masacre, Valencia y los líderes regionales recibieron el panfleto que les daba un ultimátum.

Defender el proceso de paz les ha traído la muerte

Aunque este es el más reciente hecho del peligro inminente que corren los defensores en Colombia, es tan solo una muestra de lo que ha ocurrido desde la firma del acuerdo de paz. El pacto que las Farc y el Gobierno colombiano firmaron en 2016 no le trajo tranquilidad a los líderes sociales. Por el contrario, desde entonces, año tras año, se han incrementado los asesinatos de defensores, según entidades nacionales y organismos como la ONU.

La cantidad de líderes asesinados entre 2016 y mediados de 2019 varía según qué organización los reporte, con cifras que van desde los 326 hasta los 486 homicidios. Organismos como el instituto Indepaz cuentan más de 280 asesinatos solo en lo que va de 2020. Si bien ninguno de los registros coinciden, todas las entidades señalan las mismas causas.

"Las personas defensoras son asesinadas y violentadas por implementar la paz, oponerse a los intereses del crimen organizado, las economías ilegales, la corrupción, la tenencia ilícita de la tierra y por proteger sus comunidades", explicó en su informe de diciembre de 2019 el relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos tras su visita a Colombia.

En otras palabras, proteger el acuerdo de paz y las tierras les ha significado la muerte a cientos de líderes sociales colombianos y les ha traído amenazas como la que hoy enfrentan Feliciano Valencia y las autoridades ancestrales del Cauca.



Según Global Witness en 2019 fueron asesinados 212 líderes ambientales en el mundo © France 24

Además, los pueblos indígenas son precisamente unos de los más golpeados por esta violencia. En 2019, Colombia fue el país del mundo donde más defensores de la tierra murieron, según el reporte de la ONG Global Witness. De todos los líderes asesinados que hubo en el país la mitad eran indígenas, a pesar de que estas comunidades representan solo el 4,4% de la población colombiana.

Más de 900 indígenas se desplazaron tras la decapitación de un líder ancestral

Otro capítulo reciente de la violencia en Colombia en contra de los líderes étnicos se vivió en el departamento del Chocó, que comparte frontera con Panamá. El 3 de diciembre, el grupo ilegal de narcotráfico Autodefensas Gaitanistas de Colombia decapitó al exgobernador indígena Miguel Tapí.

Bahía Solano, el lugar donde lo mataron, corría un "riesgo inminente" desde hace más de ocho meses, como lo declaró la Defensoría del Pueblo. Este organismo estatal de derechos humanos advirtió desde abril que las disputas entre diferentes grupos armados amenazaban directamente la vida de los líderes indígenas. Y a Tapí, esa violencia le costó la vida.

Pero el riesgo para las comunidades no acabó allí. Luego de su asesinato, casi un millar de indígenas de la etnia embera se desplazó a la cabecera municipal temiendo por su seguridad y hoy no tienen dónde dormir ni qué comer.

Ellos exigen acciones por parte del Gobierno del presidente Iván Duque, mientras que para los grupos armados tienen un solo clamor que revive los peores momentos del conflicto colombiano: "No más violencia contra nuestros indígenas, queremos que nos respeten la vida".